

Viernes 30 de Octubre del 2020

Señores

**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA**

**E. S. D.**

**REF. Contestación Acción de Tutela.**  
**Accionante: ALBA MARY CAMPO MORALES**  
**Accionado: CONSORCIO PTAR PW.**  
**Vinculado: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. Ramo Riesgos Laborales**  
**Radicado: 2020-0208**

**LINA MARIA ANGULO GALLEGO**, obrando en mi condición de Representante Legal Judicial de la compañía **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.790**, en adelante **ARL SURA**, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta al presente escrito, respetuosamente doy **CONTESTACIÓN** dentro del término judicial señalado a la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, de la siguiente manera:

#### **A LOS HECHOS:**

1. Primeramente, me permito manifestar que de acuerdo con la vinculación realizada por el H. Despacho, procederé a pronunciarme de la siguiente manera:
2. Conforme al escrito de tutela, la parte accionante pretende que CONSORCIO PTAR PW resuelva de fondo el derecho de petición enviado el 30 de septiembre de 2020.
3. Frente a lo anterior me permito manifestar que la pretensión de la parte accionante se encuentra dirigida en contra de una entidad diferente a la que represento. Por lo tanto, **nos encontramos ante una falta de legitimación por pasiva.**
4. Por otro lado, me permito indicar que, durante la cobertura por parte de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA, a la señora campo se le reportó accidente de trabajo el 13 de julio de 2019 **con diagnóstico único**: "trauma rodilla derecha".
5. En virtud del citado evento requirió tratamiento quirúrgico para reparación de ligamento colateral medial. Posteriormente, en rayos x de columna lumbar se identificaron **cambios degenerativos crónicos**, no derivados del accidente de trabajo, pero ninguna lesión traumática aguda.
6. Actualmente cuenta con tratamiento terminado y rehabilitación. Su última atención médica fue el 21 de abril 2020 y no tiene prestaciones pendientes.
7. Mi representada calificó el 25 de marzo de 2020 la pérdida de capacidad laboral de la accionante con un resultado de 0%, es decir que del evento no quedó NINGUNA secuela pues la lesión derivada ya se encuentra resuelta. Este dictamen fue objeto de recursos **fuera de tiempo** por parte de la accionante.
8. Por tanto, si la accionante presenta alguna patología, se debe dar aplicación a la presunción estipulada en el Artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, el cual establece que: **"Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen común"**.

9. Así, se presume que si presenta algún tipo de patología esta obedece a una patología de ORIGEN COMUN, debiendo la EPS y/o AFP de origen del mismo, autorizar todas las prestaciones que éste requiera hasta tanto NO exista una calificación de origen que señale lo contrario.
10. En consecuencia, lo solicitado debe ser canalizado a través de la EPS y/o AFP a las cuales se encuentra afiliada la parte accionante en el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, no por SEGUROS DE VIDA SURA anterior ARL SURA; debido a que el origen de las patologías determina a cargo de cuál sistema general de aseguramiento corren las prestaciones, o sea, cuando las enfermedades son de origen común, las prestaciones están a cargo del sistema general de seguridad social en salud y de pensiones y si son de origen laboral, son a cargo del sistema general de riesgos laborales, (Decreto 1295 de 1994, artículo 6°, inciso segundo).
11. Finalmente, queremos manifestar al Honorable Despacho que SEGUROS DE VIDA SURA, no se encuentra violando, ni amenazando derecho fundamental de la parte accionante, toda vez que las obligaciones que le atañen corresponden a riesgos laborales, que ocurran dentro de la cobertura de la misma. Además, la obligación de contestar el derecho de petición invocado recae sobre la entidad ante la cual se radicó, es decir, CONSORCIO PTAR PW.
12. Por las razones y motivos anteriores de manera respetuosa solicito se **DESVINCULE** de la presente acción de tutela a **SEGUROS DE VIDA SURA antes ARL SURA**, por carencia de objeto, por inexistencia de vulneración y por falta de legitimación en la causa por pasiva.

## FUNDAMENTO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

### I. FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA

La Jurisprudencia Constitucional se ha referido a la figura de la Legitimación en la Causa como “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”<sup>1</sup>, de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella.

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

---

<sup>1</sup> Sentencia T-416 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

***La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.***

***Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.***

***La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto.***" (Negrilla fuera de Texto).

Igualmente, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dado una definición más completa del tema y ha analizado la legitimación en la causa desde dos puntos de vista, el primero como la legitimación de hecho en la causa entendida como aquella relación procesal que surge entre el demandante y el demandado y la segunda instancia como la legitimación en la causa material la cual se deriva de la participación real de las personas en los hechos que en el libelo se atribuyen, independientemente de que hayan causado o no el daño. Estableciendo de igual forma que La legitimación en la causa material puede ser por activa o por pasiva; siendo esta última la encargada de estudiar si existe o no algún tipo de relación real del demandado con la pretensión que se le atribuye.<sup>2</sup>

En estos términos la legitimación en la causa por pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. De lo cual se deriva que la legitimación en la causa por pasiva es necesariamente uno de los presupuestos materiales que debe acreditar el demandante para que una sentencia sea favorable sus pretensiones; lo que en pocas palabras se traduce en el hecho de que los accionantes deben demostrar que las entidades demandadas son las instituciones llamadas a responder frente a sus solicitudes; ya que de lo contrario deben negarse las pretensiones que el accionante ha impetrado en el libelo de la demanda.

En los anteriores términos, es claro señor Juez que, dentro de la acción impetrada, no existe responsabilidad alguna por parte de mi representada, toda vez que ésta ha cumplido con las obligaciones que legal y contractualmente le asisten.

De esta forma y en cuanto a lo que mi representada se refiere, se señala que esta ha cumplido con las obligaciones que son de su resorte, por lo tanto, considero que no existe vulneración por parte de **SEGUROS DE VIDA SURA antes ARL SURA** a ningún derecho fundamental que haga procedente la acción de tutela ya que **carece de objeto sobre el cual proveer.**

---

<sup>2</sup> Sentencia 2003-2025 CJS.

## **II. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN A DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO DEL ACCIONANTE**

Establece el artículo 86 de la Constitución Política que:

“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar de los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados (...)”.

La definición atrás señalada, precisa como condición indispensable de procedencia de la acción de tutela que los derechos fundamentales resulten vulnerados y/o amenazados. Así, frente a la acción de tutela se requiere que la vulneración o amenaza sean situaciones objetivamente comprobables por el juez de tutela y permita deducir claramente la trasgresión o quebrantamiento del precepto constitucional.

Así las cosas, la Acción de Tutela prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental, está establecida como un mecanismo procesal complementario, específico y directo cuyo objeto es la protección concreta e inmediata de derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación.

Sobre el particular la honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones indicando que: no cabe la tutela si no se conculca derecho fundamental alguno, ni se puede acudir a ella simplemente cuando se tiene una inconformidad o un malestar contra una autoridad pública o contra un particular. El objeto de la tutela consiste en la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en ésta última hipótesis en los casos y dentro de las condiciones contempladas en la ley -artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. De esa manera, para que sea pertinente instaurar una acción de tutela es necesario que por lo menos exista un motivo relacionado con los derechos fundamentales de las personas puestos en peligro o vulnerados de manera que la orden judicial sea medio adecuado para amparar al peticionario garantizándole el disfrute de aquellos.

Es decir, que es indispensable la proporcionalidad entre los hechos alegados por el accionante y la protección judicial que solicita. Así pues, no todo conflicto debe ser resuelto a través de la acción de tutela como único mecanismo de solución si la misma naturaleza de la relación de que se trata ofrece diversas opciones o posibilidades suficientes para determinar cómo poner fin a la controversia.

Ha sido criterio de esta Corte, como así lo ha venido expresando en diversas providencias, que la judicialización de todo problema suscitado entre individuos o colectividades no conduce a nada distinto de la innecesaria congestión de los tribunales con el consiguiente bloqueo a las causas que en verdad requieren de la intervención del juez, lo cual además perjudica en grado sumo el normal funcionamiento de las instituciones en cuanto distrae sin objeto la atención y el esfuerzo de las autoridades judiciales”.

## **III. NO EXISTE VULNERACIÓN DE DERECHO FUNDAMENTAL**

El artículo 86 de la Constitución Política ha consagrado la acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados por sus normas reglamentarias, siempre que quien la invoque, no disponga para el efecto de otros medios de defensa judiciales.

A su vez, sobre la procedencia de la acción de tutela el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece:

“Artículo 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA: La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.

### PETICIÓN

Conforme a la respuesta dada a los hechos, las pruebas adjuntas y el fundamento jurídico y jurisprudencial, solicito de manera respetuosa Señor Juez, **NEGAR** el amparo constitucional solicitado por la parte accionante y, en consecuencia, declarar la **IMPROCEDENCIA** de esta acción de tutela por no vulneración de un derecho fundamental por parte de **ARL SURA**.

### PRUEBAS Y ANEXOS

1. Certificado de existencia y representación legal de ARL SURA.
2. Historia laboral

### NOTIFICACIONES

Las recibiré en la **Calle 64N No. 5BN-146 Centro Empresa. Local 106C en la ciudad de Cali** .  
Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@arlsura.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@arlsura.com.co)

Del señor Juez,



**LINA MARIA ANGULO GALLEGO**  
**C. C. No. 67.002.356**  
**Representante Legal Judicial de ARL SURA**